TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Ref: Exp. 25754-31-10-001-2019-00339-01.

Pasa a decidirse el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el auto de 15 de mayo último dictado por el juzgado de familia de Soacha dentro del proceso verbal promovido por Carmen Edilia Osorio de Osorio contra Arcelia Aguilar e Isidro Téllez González, en calidad de herederos determinados de Albeiro Téllez Aguilar y los herederos indeterminados del citado causante, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

La demanda pidió declarar que entre la demandante y el causante Albeiro Téllez Aguilar, existió una unión marital de hecho entre el 7 de febrero de 2001 y el 1° de mayo de 2016, fecha del deceso de aquél, de la cual surgió la correspondiente sociedad patrimonial.

Notificada la demandada Arcelia Aguilar, se opuso formulando las excepciones que denominó ‘prescripción extintiva de la acción de unión marital y disolución y liquidación de la presunta unión marital y patrimonial de hecho’, ‘inexistencia de la unión marital y la sociedad patrimonial de hecho, con ausencia total de ayuda y socorro mutuo que la ley exige para estos procesos’ y ‘mala fe de la actora y tratar de engañar al despacho y a las partes con sustentación mentirosa’, en cuyo sustento pidió, entre otras pruebas, escuchar el testimonio de Rosadelia Tarazona

Becerra, el que también fue solicitado por Luz Stella Jiménez Sánchez, quien compareció al proceso aduciendo su calidad de compañera permanente del de-cuius y decretado en la audiencia inicial llevada a cabo el 3 de agosto del año anterior.

En la etapa de instrucción y juzgamiento, practicados los testimonios de María Marlén Monroy, Olga Lucía Montejo, Arcelia Aguilar y Miryam Astrid Torres Aguilar, y atendiendo que la citada deponente no encendió la cámara y el micrófono, el despacho prescindió del testimonio tras considerar que de ese comportamiento lo que puede colegirse es que no desea declarar; inconforme con esa determinación, interpuso la demanda recurso de reposición y, subsidiariamente de apelación; frustráneo el primero, le fue concedido el segundo en el efecto devolutivo el cual, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II. El recurso de apelación

Alega que a los testigos escuchados a petición de la demandante se les concedió un término prudencial para que se conectaran, mientras que a Rosadelia, quien estuvo presta desde el principio para rendir su declaración, tanto que en la misma audiencia se le solicitó que se retirara de la diligencia hasta que fuese llamada a declarar, se niega a escucharla, desconociendo que en la virtualidad, no todos los aparatos electrónicos tienen la misma señal o alcance tecnológico, por lo que con esa decisión se le vulnera el derecho de defensa, dada la importancia que tiene esa declaración, porque fue la empleadora del causante y por eso tiene conocimiento directo de la relación existente entre él y Luz Stella Jiménez Sánchez.

Consideraciones

La apelabilidad del proveído impugnado deviene de la decisión que prescindió del testimonio de Rosadelia Tarazona Becerra, pues en últimas encuadra con la descripción del numeral 3º del artículo 321 del código

general del proceso que enlista como apelable el auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas.

Pues bien. Lo que dispone el precepto 218 del estatuto general del proceso es que en caso de que el testigo desatienda la citación “[s]in perjuicio de las facultades oficiosas del juez, se prescindirá del testimonio de quien no comparezca” (numeral 1º), mandato que armoniza con el literal b) del artículo 373 del citado ordenamiento, a cuyo tenor se tiene que en la audiencia de instrucción y juzgamiento el juez “[r]ecibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y prescindirá de los demás”, de donde se sigue que si en este caso la testigo compareció a la audiencia fijada con la finalidad de evacuar las pruebas decretadas, como se comprueba de la grabación de la audiencia, donde se aprecia que habiéndose señalado por parte del juez que la siguiente prueba en practicar sería el testimonio de Rosadelia Tarazona Becerra, se realizó la conexión de ésta, no puede decirse que el supuesto previsto en la norma para prescindir de esa declaración esté cumplido.

Cierto, tras establecerse esa conexión transcurrieron unos tres minutos en los que la deponente no encendió el micrófono ni su cámara; mas concluir de ello que su deseo era no declarar y que se debía prescindir de ese testimonio, cuando ya previamente se había conectado a la audiencia no viene de ningún modo posible, no sólo porque si ya se había hecho presente en la audiencia virtual lo que eso demuestra es que su intención era la de cumplir con la citación que se le hizo, sino además porque tratándose de una norma de evidente cariz sancionatorio, debe ponderarse de forma restrictiva, pues no puede dejarse de lado la “necesidad de adoptar ‘todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones

y ejercer sus derechos” (Cas. Civ. Sent. de 5 de agosto de 2020, exp. STC5158-2020).

Es que “*en virtud de los riesgos que la presencia física genera, las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura y la necesidad de poner en marcha la «administración de justicia», por su carácter esencial, los jueces y usuarios se han visto precisados a recurrir a las «tecnologías de la información y de las comunicaciones» para ejercer todos sus actos, o al menos gran parte de éstos*”, de modo que a pesar de que éstas no son novedosas porque esa intención del legislador de procurar la digitalización del servicio de justicia ya se venía exhibiendo desde la ley 270 de 1996, su “*uso para el servicio de justicia sí lo es, y obliga a sus funcionarios y usuarios a acoplarse a tales herramientas con el fin de ejecutar los «actos procesales» que les corresponden en desarrollo de un litigio*” (Cas. Civ. Sent. de 11 de septiembre de 2020, exp. STC7284-2020).

Y precisamente persuadida de que las medidas implementadas a raíz de la pandemia reclaman el uso de las nuevas tecnologías para la interacción digital y virtual entre los despachos judiciales y los usuarios de la administración de justicia han traído dificultades para todos, es que la doctrina constitucional ha señalado que “*cuando se trata de realizar «audiencias virtuales» es fundamental que quienes deban intervenir en ellas tengan «acceso» y manejo del «medio tecnológico» que se utilizará a fin de llevarlas a cabo*”, el juez “*claramente no es ni puede ser ajeno a esa situación, ya que es a él, como director del proceso, a quien compete adoptar las medidas a su alcance para que la «audiencia» pueda verificarse*” (Cas. Civ. Sent. de 11 de septiembre de 2020, exp. STC7284-2020), línea de pensamiento bajo la cual aflora palmario que el proveído fustigado no puede mantenerse, desde luego que si en este caso el juzgador no hizo nada por establecer si la deponente estaba presentando problemas de conectividad o alguna circunstancia que le imposibilitara encender la cámara y el micrófono, sino que optó tras un término relativamente corto

por cerrar abruptamente el debate probatorio, cuando las cosas debían inclinarse hacia la efectividad del derecho que tienen las partes de probar los supuestos de las normas que contemplan los efectos jurídicos que ellas persiguen, ese es lo que debe concluirse, especialmente cuando ya se sabe, en tratándose del derecho sustancial, el juzgador debe disponer las cosas para que éste se imponga.

La conclusión que de lo anterior puede extraerse, es la que el auto apelado debe revocarse. No habrá condena en costas dada la prosperidad de la alzada.

III.- Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, revoca el auto impugnado de fecha y procedencia preanotados para, en su lugar, ordenarle al a-quo que disponga lo relativo para la recepción del testimonio de Rosadela Tarazona Becerra.

Sin costas.

En firme, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

German Octavio Rodriguez Velasquez

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4a415a4a4132ab993dadc74b6aa09e0f47afdf1a8e6da43cd307cb7cfdcc200e**

Documento generado en 13/06/2023 12:56:42 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>